



ENFOQUE PAÍS

COSTA RICA

POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE UN DESARROLLO ALINEADO CON LA META GLOBAL DE TEMPERATURA

EL CASO DE COSTA RICA

Embajador Christian Guillermet Fernández
*Vicecanciller para Asuntos Multilaterales
Comisionado Presidencial de Costa Rica ante el Proyecto Mesoamérica*

La transformación de nuestras economías para mitigar y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático debe estar en el centro de la planeación de políticas públicas, en particular en la coyuntura de la recuperación económica derivada de los efectos de la COVID-19, y dados los altos índices de vulnerabilidad de los países de nuestra región. Los modelos de desarrollo deben ir en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo, y acompañados además de la urgencia de mantener el incremento de la temperatura por debajo de 1.5°.

La ciencia nos dice que estamos muy lejos de cum-

plir con esta meta de temperatura. Según el último Reporte de Síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, es necesario bajar en un 45% las emisiones para el año 2030 (sobre la base de las emisiones de 2010). La realidad, sin embargo, es que caminamos sobre la senda de un desarrollo que probablemente nos lleve a un aumento de un 16% de emisiones en 2030 (sobre la base de las emisiones de 2010).

Este trágico resultado nos asegurará la pérdida de gran parte de la biodiversidad mundial, el aumento del nivel de mar y la consecuente desaparición de

territorios insulares, así como la ocurrencia de gran cantidad de desastres naturales, afectaciones a la agricultura y por ende a los procesos de alimentación, y la aparición de nuevas enfermedades, entre muchas otras repercusiones.

La innegable realidad del cambio climático y los procesos internacionales de la mano de las Naciones Unidas, o por medio de iniciativas privadas y de la sociedad civil, impulsan una agenda muy agresiva para enfrentar este fenómeno. Como resultado de estas incitativas, se han facilitado los procesos nacionales en favor de una mayor ambición en la agenda climática, y se ha impulsado una mayor concientización de los actores sociales, que demandan mejores políticas y marcos normativos para un desarrollo sostenible.

Las autoridades de los países de la región cuentan con una serie de herramientas para facilitar la integración de la agenda climática en la gestión pública. Entre estas herramientas podemos mencionar las Estrategias de Largo Plazo (LTS por sus siglas en inglés), las políticas de mitigación, adaptación y otras transversales.

Costa Rica, por ejemplo, lanzó su Plan Nacional de Descarbonización el 24 de febrero de 2019, su hoja de ruta para convertir la economía costarricense en moderna,

verde y con emisiones netas cero para el año 2050. Actualmente, el Plan tiene un 91% de cumplimiento de las metas establecidas en la primera etapa de “cimientos”, que contempla el trabajo entre 2018-2022, a pesar de retrasos generados por la atención a la emergencia causada por la COVID-19, así como por la priorización de los recursos nacionales y del trabajo de las instituciones en contener la pandemia.

Costa Rica también cuenta con una *Política Nacional de Adaptación* (2018), que promueve un “desarrollo verde e inclusivo”, a través del fortalecimiento de los programas de conservación, la ampliación del programa de pago por servicios ambientales y la adaptación basada en ecosistemas. Aspira a que para el año 2030, el país transforme en oportunidades las amenazas que impone el cambio climático al país por medio del fortalecimiento de las capacidades y condiciones de resiliencia social, ambiental y económica, mediante procesos de innovación y gobernanza participativa, que permitan prevenir y recuperarse ante los efectos adversos del cambio climático.

Esta política se ha ejecutado en todo el país a través de instrumentos como guías metodológicas, y ya más de 20 gobiernos locales la han incorporado en sus procesos de planificación local.



Finalmente, Costa Rica presentó su primera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) en 2015, como el aporte nacional voluntario ante la comunidad internacional en el marco del Acuerdo de París. En 2020, se actualizó la NDC a partir de un proceso robusto de consulta ciudadana y la construcción de modelos climáticos, alineados con una trayectoria consistente con la meta de limitar el aumento de la temperatura media mundial.

El proceso de transformación de los modelos de desarrollo debe venir de la mano de la eliminación de inversiones y subsidios en industrias que no contribuyen a la meta global de temperatura, en particular las industrias de carbón y combustibles fósiles como petróleo y gas natural. En la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se tramita un proyecto de ley que eliminaría el uso de combustibles fósiles en el país, convirtiéndolo en un territorio libre de la exploración y explotación del petróleo y el gas natural.

También se requiere que los países cuenten con mejores medios de implementación para el desarrollo de su agenda climática, incluyendo la construcción de capacidades, el acceso a mejor tecnología para aumentar la eficiencia en los procesos productivos y comerciales, así como el diseño de estrategias de financiamiento y atracción de inversiones para la transformación.

Todos estos procesos de transformación han de realizarse bajo consideraciones estratégicas integrales con enfoque de derechos humanos e igualdad de género, a fin de garantizar el respeto a la diversidad y la promoción de la inclusión. Deben asegurar también un proceso amplio de consulta con todos los sectores de la sociedad, incluyendo sectores de alta vulnerabilidad como las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes y el sector privado, todas piezas clave en el desarrollo de un nuevo modelo productivo.

Es importante también que los países impulsen y participen en iniciativas de acción climática a nivel internacional, contribuyendo de esta manera a las metas globales para la atención del cambio climático, claramente delineadas en el Acuerdo de París.

Costa Rica ha impulsado la Coalición para la Alta Ambición para las Personas y la Naturaleza, que busca que el 30% del territorio terrestre y el 30% del territorio marino estén bajo un modelo de protección para el año 2030. Igualmente, impulsa junto a Dinamarca la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés), encaminada a alinear la industria del petróleo y el gas con las metas del Acuerdo de París.

De la misma forma, Costa Rica fue el anfitrión de la PreCOP en 2019, en preparación para la COP25 que se realizó en Madrid bajo la Presidencia de Chile, ocasión en la que se hizo el lanzamiento del Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climática (SINAMECC), que agrupa datos que generan y compilan principalmente las entidades públicas sobre esta problemática.

Por el desarrollo de iniciativas como éstas, el país ha sido reconocido internacionalmente con premios como el de Champions of the Earth (2019), y más recientemente, el premio Earthshot, presentado este mes por el Príncipe Guillermo, Reino Unido, en una ceremonia virtual.

Apoyar a políticas que tomen al cambio climático como la variable central para la toma de decisiones en los países de nuestra región, y para la implementación de las transformaciones de los modelos de desarrollo de nuestras sociedades, permitirá responder a los riesgos de este fenómeno en el corto y el largo plazo, al tiempo que cimentará el diseño de mejores y más eficientes formas de atender sus consecuencias.

La participación de gobiernos locales y de las comunidades en general, y en particular de los grupos de mayor vulnerabilidad, supondrá un porcentaje mayor de éxito en la ejecución de estas políticas, con un impacto más directo y beneficioso para todos los miembros de la sociedad. Costa Rica ha apostado a esta trayectoria, a favor de su propio desarrollo, pero con la conciencia clara de que sus acciones repercuten de manera directa en el logro del objetivo de temperatura al que todos los países del Acuerdo de París se suscribieron.